

sagran la defensa del derecho a la intimidad del menor como una garantía de un desarrollo posterior saludable.

Por las razones expuestas precedentemente y en virtud de lo establecido en el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Patricia Bullrich.

—A las comisiones de Legislación Penal, de Familia, Mujer y Minoridad, de Comunicaciones y de Asuntos Constitucionales.

11

398-A-97

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

#### MODIFICACION DEL TITULO III DEL CODIGO PENAL

Artículo 1º — Suprímese el título III —delitos contra la honestidad— del Código Penal, el que pasará a formar parte del título I —delitos contra las personas—, como el nuevo capítulo IV —delitos contra la integridad de las personas—, conforme a las modificaciones establecidas por la presente ley.

Art. 2º — Modifícase el artículo 119 del Código Penal, el que se sustituye por el siguiente texto:

Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, quien vejara sexualmente, con o sin acceso carnal, a persona de uno u otro sexo, mediante uso de fuerza, coacción, intimidación, engaño o abuso de poder, aun cuando fuera ejercido en el marco de las relaciones conyugales o de concubinato u otras relaciones de autoridad y jerarquía, forzando su consentimiento.

Si la persona de uno u otro sexo fuera menor de doce años, o tuviera una discapacidad mental grave, se hallare privada de razón o de sentido, o por enfermedad o cualquier otra razón, no pudiera consentir libremente la acción, no se requerirá el uso de la fuerza, coacción y/o intimidación para imponer la pena antes citada.

Art. 3º — Deróganse los artículos 120 y 121 del Código Penal.

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 122 del Código Penal por el siguiente texto:

La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, en los casos del artículo 119, cuando:

1. Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima.
2. El hecho fuere cometido por un cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano/a, tutor o encargado de la guarda.

3. Existiere entre el autor del delito y la víctima relación de poder, autoridad, confianza o dependencia.

4. La víctima sufre una discapacidad mental o inconsciencia permanente o transitoria.

5. El delito fuere cometido con el concurso de dos o más personas.

6. El delito fuere cometido con armas.

7. El delito sea utilizado como método de tortura.

8. Cuando el autor sea portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y tuviere conocimiento de ello.

Art. 5º — Sustitúyese el artículo 125 del Código Penal por el siguiente texto:

El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de menores de 18 años, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado con reclusión o prisión de cuatro a doce años.

Cualquiera fuera la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de seis a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de intimidación o coacción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, conviviente, hermano o afín en línea recta, tutor o personal encargada de su educación o guarda, o mantuviera con la víctima relación de poder, autoridad o dependencia.

Art. 6º — Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal por el siguiente texto:

Será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años, el que se hiciere mantener, aunque sea parcialmente, por una persona que ejerza la prostitución, explotando las ganancias de esa actividad, mediando violencia, amenaza, abuso de autoridad, engaño o cualquier otro medio de coacción o intimidación, relación de poder, autoridad o dependencia.

Art. 7º — Sustitúyese el artículo 127 del Código Penal por el siguiente texto:

Se impondrá prisión o reclusión de seis meses a cuatro años, al que abusare sexualmente de otra persona, cuando concurrirén algunas de las circunstancias del artículo 119 y no llegare a constituir el ultraje sexual grave descrito en ese artículo.

Si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en el artículo 122 o concurrirén alguna de las circunstancias descritas por dicho artículo, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

Art. 8º — Sustitúyese el artículo 127 bis del Código Penal por el siguiente texto:

El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona para que ejerza la prostitución, mediando violencia, amenaza, abuso de autoridad, engaño, o cualquier otro medio de coacción o intimidación, relación de poder, autoridad, confianza o dependencia, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.

Si la víctima fuera menor de edad, no se exigirán las circunstancias descritas en el párrafo anterior, y la pena se elevará de cuatro a quince años.

Art. 9º — Derógase el artículo 128 del Código Penal.

Art. 10. — Sustitúyese el artículo 129 del Código Penal por el siguiente texto:

Será reprimido con multa de quinientos a diez mil pesos el que ejecutare o hiciere ejecutar por otro actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.

Art. 11. — Sustitúyese el artículo 130 del Código Penal por el siguiente texto:

Se impondrá prisión de uno a cuatro años al que, sustrajere o retuviere a una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual, por medio del uso de fuerza, coacción y/o intimidación, engaño, abuso de poder, relaciones de autoridad, dependencia o confianza.

La prisión será de dos a seis años, si la víctima fuera menor de doce años, aunque mediare su consentimiento.

Art. 12. — Deróganse los artículos 131 y 132 del Código Penal.

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 133 del Código Penal por el siguiente texto:

Los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, y cualesquiera persona que, con relación de poder, autoridad, dependencia, confianza, o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo serán reprimidos con la pena de los autores.

Art. 14. — Dispóngase la correlación y reenumeración del articulado correspondiente.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Elisa M. Carrió. — Elisa B. Carca. — Víctor F. Fayad. — Alfredo P. Bravo.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto propone una reformulación integral de los delitos encuadrados en el título III del Código Penal (delitos contra la honestidad).

En primer lugar, se propone suprimir ese título y trasladar esos delitos al título I —delitos contra las

personas— como un nuevo capítulo denominado —delitos contra la integridad de las personas—. La ubicación y conceptualización de las agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la sexualidad de las personas como delitos contra la honestidad, se basa en los valores vigentes en épocas de Alfonso X, los cuales hacían referencia al honor manciado (buena fama) de las mujeres afectadas por esos comportamientos sexuales, al hecho de que dejaban de ser honestas y, por lo tanto, resultaban doblemente victimizadas, por el agresor y por la sociedad. Pero sobre todo, se referían al honor y al nombre de quienes eran sus dueños, tutores o responsables, es decir, padres, esposos, tíos, padrinos, patriarcas familiares señores, etcétera.

Es necesario puntualizar que las agresiones de referencia afectan, no el honor o la honestidad de las víctimas de esas acciones, sino su integridad y dignidad como personas. Si bien es cierto que estos delitos afectan su libertad, las personas afectadas viven esas situaciones particularmente como atentados a su propia integridad, privacidad o identidad, más allá de que también afecten a sus familiares, tutores, al Estado, etcétera. Por lo tanto, corresponde concebir a estos crímenes como delitos contra las personas, al igual que otros de igual índole descritos por el título I.

Tal como lo ha expresado Silvia Chejter: "La inserción de los ultrajes sexuales... como delitos contra la honestidad es un significativo de algo que quiere ser transmitido a través del Código Penal. Y puede ser visualizado como vestigio o perseverancia de estratificaciones persistentes del derecho a través de las épocas, como voluntad de recordar y sostener esos valores, o como huellas anacrónicas en desuso, que se resisten a desaparecer" (Silvia Chejter, *La voz tutelada*, 1990).

Estos delitos son actos de agresión y violencia que atentan fundamentalmente contra la integridad física, psíquica y moral de las mujeres. Es una agresión sexual contra la autodeterminación como mujeres, como personas libres para decidir sobre su sexualidad, sobre su propio cuerpo. Es la humillación, el sometimiento y el abuso de un ser al que se le considera inferior. El tratamiento de estos delitos ha considerado a las mujeres como si no fueran personas, como si se tratara de un caso de incorrección de las relaciones sexuales, o como si las mujeres fueran propiedad de algunos varones.

Tal como sostiene Susan Brownmiller en *Against our Will*: "Dado que los antiguos patriarcas concebieron la violación de las mujeres en los términos de su propio poder, cómo podrían ellos concebir la violación como un crimen de los varones contra las mujeres. Las mujeres eran completamente subsidiarias y no seres independientes. De esta manera, la violación no podía ser considerada como una cuestión de consentimiento o rechazo de la mujer, ni podía existir una definición aceptable para los varones basada en la comprensión de el derecho de los mujeres a su integridad corporal. La violación entró en el derecho por la puerta trasera, como si fuera un crimen contra la propiedad de algunos hombres por otros hombres. Las mujeres, por supuesto fueron consideradas como la propiedad".

Una percepción adecuada de las agresiones sexuales debe considerar al crimen estrictamente como una

injurio a la integridad de la víctima, no una injuria a la pureza o castidad o el honor de algún varón. Más aún, estos delitos implican una restricción de la libertad de movimiento de las mujeres. No sólo por el hecho de que un acto individual de violación restringe la libertad de movimiento de la víctima sino que la frecuencia de las violaciones y la amenaza de ser una víctima equivale a una coerción social. Las agresiones sexuales no son una serie accidental de eventos individuales sino que están institucionalizadas. La violencia sexual es una práctica socialmente coercitiva que no es natural e inevitable sino que es social y alterable.

El nuevo encuadramiento que se propone pretende conceptualizar estos delitos teniendo como base que el bien jurídico tutelado es la integridad y la dignidad de las personas, independientemente de cualquier otra consideración. Así, se propone modificar la definición del artículo 119 (violación), partiendo de un concepto más amplio y teniendo en consideración la defensa del bien jurídico mencionado.

La víctima o el autor pueden ser, según la nueva definición, de uno u otro sexo, dado que la gravedad de la ofensa no debe ser ligada al género de la víctima, aun cuando una mayoría abrumadora, casi excluyente, de estos crímenes son cometidos por varones contra mujeres. Asimismo, la concepción de la acción es más amplia que en el código actual, ya que permite incriminar como violación a todo tipo de penetración, incluyendo casos como la *fellatio in ore* y la penetración anal, situaciones de ultraje grave que no lleguen a la penetración, como el *cunnin lingus*, la utilización de otros instrumentos que no sean el órgano sexual masculino, el sometimiento violento y prolongado que no culmine en la penetración, etcétera.

Esta ampliación tiene su justificación en la comprobación de que los efectos psicológicos y físicos, emocionales y sexuales sobre la víctima son los mismos en estos casos que en los que mencionaba la figura tradicional. La violación fue definida por la ley como una ofensa heterosexual caracterizada por la cópula genital. Sin embargo, los ataques sexuales no se limitan a la cópula genital forzada, ni es exclusivamente una ofensa de los valores contra las mujeres. La tradición y la oportunidad biológica han otorgado a la violación vaginal un lugar principal como un crimen con una particular historia política, pero la invasión puede ocurrir a través de la boca o el ano o por otros actos igualmente gravosos para la integridad de la víctima. Y si bien el pene sigue siendo el arma favorita de los violadores, no es de hecho su única herramienta. Palos, botellas y aun dedos son muchas veces sustitutos. Quién puede decir que la humillación sufrida por la penetración anal u oral forzada es una violación menor de los espacios íntimos, privados, una menor injuria a la mente, al espíritu, al sentido de sí misma de la víctima. Todos estos actos forzados deben ser tratados conceptualmente como ofensas igualmente graves desde la perspectiva del derecho, dado que la vía de la penetración es menos significativa que la degradación a los efectos de la injuria al bien jurídico que se pretende tutelar.

Asimismo, los conceptos de fuerza, intimidación o resistencia deben ser revisados para dar lugar predo-

minantemente al libre consentimiento y otros factores que pueden anularlo. Al revisar el acto para determinar si el crimen fue cometido, el concepto de consentimiento que se ha debatido tradicionalmente en la doctrina y la jurisprudencia se ha basado en si la víctima ofreció suficiente resistencia al ataque, si su voluntad fue realmente superada por el uso de la fuerza o la amenaza de daño físico. Tal como lo sostiene Susan Brownmiller, la naturaleza peculiar de los crímenes sexuales violentos, así como la peculiar percepción histórica de los varones de su significado ha oscurecido la percepción del derecho del consentimiento. Es aceptado sin cuestionar que en el caso de un robo, la víctima no necesita probar que resistió al robo y nunca se infiere del hecho de que entregó el dinero que ha consentido el acto y, por lo tanto, el acto no es un crimen. En realidad, la Policía usualmente aconseja los ciudadanos no resistirse a un robo sino esperar pacientemente y luego informar del delito a la autoridad competente y dejar toda la cuestión en las manos del derecho. Más aún, en algunas ciudades, la gente que debe estar por las calles volviendo del trabajo tarde, acostumbra llevar algún monto pequeño de dinero para conformar a los ladrones, dado que la amenaza del daño físico resulta más gravosa que el riesgo de perder dinero. En el caso de un ataque sexual, el daño físico es mucho más que una amenaza; es una realidad porque la violencia es una parte integral del acto. El contacto corporal y la invasión física es el propósito del crimen. Sin embargo, la naturaleza del crimen tiene algo en común con el robo, porque el propósito sexual del violador se asemeja al propósito económico del ladrón. Por lo tanto, en un crimen sexual, la respuesta de una víctima puede ser semejante a la de la víctima de un robo. Bajo las reglas del derecho, las víctimas de robos o asaltos no necesitan probar que ellos se resistieron, o que no consintieron, o que el acto fue cometido con la suficiente fuerza, o suficiente amenaza de fuerza, para superar su voluntad, porque la ley presume altamente improbable que la gente se desprenda de su dinero voluntariamente y que la gente no se somete voluntariamente a sufrir daños corporales y secuelas permanentes. Pero las víctimas de violación necesitan probar estos requisitos porque el derecho usualmente no ha sido capaz de distinguir satisfactoriamente entre un acto sexual mutuamente deseado de una agresión sexual forzada, porque no ha escuchado las voces de las mujeres.

Asimismo, Brownmiller explica que sólo un porcentaje menor de las violaciones se producen con armas, los casos más proclives a ser creídos por el sistema. La mayoría de las violaciones se cometen sin el uso de armas, a través del uso de fuerza física, lesiones y golpes, amenazas de muerte o daños graves, la presencia de dos atacantes, la rotura de ropas, el ataque improvisado y la inmovilización forzada de la víctima. Sin duda, cualquiera de estas circunstancias puede y produce un terror inmovilizante en la víctima, un terror suficiente para tornarla incapaz de resistir o para hacerle creer que cualquier resistencia que pueda emplear es inútil. Los criterios aplicados para medir la resistencia o el consentimiento, vis a vis, la fuerza o la

amenaza de fuerza nunca han sido capaces de captar precisamente el terror de la víctima, porque el terror es una reacción psicológica y no un criterio que puede ser leído por parámetros objetivos varios meses después en los tribunales.

Por otra parte, no sólo se mide y pesa la respuesta de la víctima durante el acto, sino que su propia historia sexual pasada es sometida a un escrutinio prejuicioso bajo la teoría de que se relaciona con su "tendencia a consentir", o que refleja su credibilidad, su veracidad, su predisposición a decir la verdad o a mentir. Los juzgadores a los que se les presenta tal historia del pasado sexual de la víctima hacen uso de tal información para formarse una apreciación moral de su carácter, y aquí entran en juego todos los viejos mitos de la violación, dado que persiste la vieja creencia de que una mujer virtuosa o no puede ser violada o no se expone a situaciones que la dejan en riesgo de sufrir un ataque sexual. Por eso, muchas veces se ha dicho que la mujer estaba provocando el ataque y, por lo tanto consintiendo, o que una mujer honesta hubiera luchado hasta la muerte para defender su "virtud". Asimismo, es imposible aceptar la defensa de que el atacante creía que la víctima consentía, considerando meramente el punto de vista del atacante, pues ello implica adoptar desde el derecho el punto de vista que genera el ataque.

Por ello, se amplían los factores que anulan el libre consentimiento más allá de la fuerza y la intimidación, incluyendo los supuestos de coacción, engaño, abuso de poder, aun cuando fuera en el marco de relaciones conyugales o de concubinato e incorporando otra relaciones de autoridad y jerarquía que fueren el libre consentimiento.

Se reconoce claramente la violación dentro de la pareja, ya sea unida en matrimonio legal o en unión de hecho. Durante muchos años se ha entendido que el marido podía exigir el débito conyugal o que la agresión sexual por parte del marido no implicaba una violación a la honestidad de la esposa. En estos casos se consideraba que no quedaba configurado el delito de violación, porque se consideraba que la esposa había prestado por anticipado el consentimiento para ser accedida carnalmente, en virtud del débito conyugal incluido entre los deberes nacidos del matrimonio, y, en los casos de uniones de hecho, que la concubina había prestado consentimiento por considerar que la cohabitación comprendía la ejecución de la cópula.

Se deroga el artículo 120, dado que la pretensión de amparar a menores que tienen comprometida su capacidad para asumir libre y plenamente el consentimiento ya ha sido protegida por la nueva formulación del artículo 119.

Con respecto al artículo 121, se deroga la figura del acceso carnal fraudulento por entender que es una situación que ya no se produce y, en todo caso, estaría encuadrada en la nueva definición del artículo 119 respecto del engaño. En el derecho comparado, por lo general, ya se ha suprimido esta figura, con la excepción del Código Húngaro. Esta figura estaba basada en las épocas de gran flujo inmigratorio, en la cual

solían celebrarse casamientos por poder, o propuestas epistolares de casamiento. La distancia y el escaso desarrollo de las técnicas de comunicación daba lugar a la posible comisión de fraudes y la víctima tenía pocas posibilidades de tener conocimiento del engaño al que había sido sometida.

En cuanto a los agravantes establecidos por el artículo 122, se amplían los supuestos incluyendo los casos en los que resultare un daño grave a la salud mental dado que no existe justificación alguna para limitarse a los daños físicos, cuando los perjuicios psicológicos puedan ser mucho más devastadores.

Asimismo, dentro de los agravantes por el vínculo se incluyen cónyuges y convivientes, y aquellas situaciones en las cuales existiere una relación de poder, autoridad, confianza o dependencia entre el autor del delito y la víctima, partiendo de una concepción amplia del abuso sexual incestuoso, que radica no sólo en la consanguinidad sino en el tipo de vínculo que caracteriza la relación. También se incorpora como agravante la situación de discapacidad mental o inconsciencia permanente o transitoria de la víctima. Otro criterio reflejado por la modificación propuesta es que la ley debe reflejar, más allá de los daños objetivos, la manera en la cual el asalto fue cometido. Así como la ley distingue entre un ataque contra la propiedad cometido con armas del perpetrado sin armas, así debe agravarse la pena en el caso de una violación cometida con armas, en la cual la amenaza contra la vida de la víctima es evidente y manifiesta. De la misma manera, se establece como agravante el hecho de que el delito hubiera sido cometido como método de tortura. Finalmente, se incluye entre las agravantes, el hecho de que el autor sea portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y tuviere conocimiento de ello.

Se elimina la distinción de edad para el delito de promover o facilitar la prostitución o corrupción de menores y se limita hasta los dieciocho años. Se incluye entre las agravantes por el vínculo las relaciones de poder, autoridad o dependencia. Se sustituye el artículo 126 incluyendo la tradicional figura del rufianismo, teniendo en consideración aquellos factores que anulan o vician el consentimiento, con la intención de proteger la autodeterminación de la víctima.

Se mantiene la figura del abuso, que en este caso se denominará abuso sexual y no deshonesto, partiendo de la concepción general del bien jurídico tutelado en este capítulo. Se aplicará para aquellos casos en los cuales el ultraje no revista la gravedad del supuesto del artículo 119.

En el caso de exhibiciones obscenas se limita la punibilidad a aquellos supuestos en los que sean expuestas ante quienes no consienten o son involuntariamente sometidas a ellas.

Con respecto al delito de rapto, se sustituye las intenciones deshonestas por el concepto de intento de menoscabar la integridad sexual, de acuerdo con la conceptualización del bien jurídico protegido por este capítulo anteriormente descrita y se extiende a las situaciones de coacción, engaño, abuso de poder, relaciones de autoridad, dependencia o confianza. Se elimina el agravante en caso de mujer casada que tendía a prote-

ger un interés del esposo en lugar del de la víctima de acuerdo con la concepción tradicional del honor mancillado.

Se elimina la exigencia de pena por matrimonio de la víctima, sólo justificable en el marco conceptual en el cual el bien jurídico protegido era la honestidad en los términos patriarcales, que consistía fundamentalmente en no mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por otra parte, esta exigencia ha llevado a situaciones de abuso donde la víctima resultaba sometida a matrimonios indeseados, y en los cuales el autor del delito contraía matrimonio al sólo efecto de la condonación de la pena.

Finalmente, se formula el artículo 133 en consonancia con las modificaciones propuestas para las otras disposiciones encuadradas en este capítulo, incorporando a los convivientes y personas con relación de poder, autoridad, dependencia o confianza respecto de la víctima, que cooperaren a la perpetración de los delitos contra la integridad de las personas.

A los efectos de la presentación de esta propuesta se ha tenido en cuenta la opinión de la licenciada Silvia Chejter en *La voz tutelada*, del Centro de Encuentros Cultura y Mujer y se ha contado con la valiosa colaboración de la doctora Marcela V. Rodríguez en la elaboración y redacción de este proyecto.

Elisa M. Carrió. — Elisa B. Carca. — Alfredo P. Bravo. — Víctor M. Fayad.

—A la Comisión de Legislación Penal.

12

#### Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

#### DECLARA:

1º — Auspiciar, declarar de interés nacional y legislativo, sin que ello implique erogación financiera alguna, el Simposio Internacional sobre Protección de Viñedos y Frutales con Red Antigranizo, organizado por la Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída del INTA y el Centro de Ingenieros Agrónomos Mendoza, Subsección Zona Sur —CIAM—, a realizarse entre los días 2, 3 y 4 de abril de 1997, en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

2º — Solicitar a la entidad organizadora envíe a esta Honorable Cámara las conclusiones del citado simposio internacional.

Oscar Sat.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El simposio internacional cuyo auspicio solicitamos, es organizado por instituciones de gran arraigo y firme compromiso con el sur de la provincia de Mendoza.

Los diferentes enfoques sobre protección de viñedos y frutales con red antigranizo, ha llevado a convocar por parte de los organizadores, a prestigiosos expertos en la materia tanto nacionales como internacionales.

Ya son numerosas las adhesiones que se han recibido, así como la confirmación de la asistencia de destacados técnicos de Francia, Italia y España, y está a ser confirmada la de expertos de Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Es objeto del evento actualizar y adquirir nuevos conocimientos que permitan hacer frente a este flagelo que, periódicamente, provoca ingentes daños a los cultivos de la zona y de otras regiones del país.

El temario incluye, entre otros, temas como: tecnologías de aplicación de coberturas antigranizo en viñedos y frutales, efectos de microclima producido bajo éstas, manejo de los cultivos en las nuevas condiciones, análisis económico financiero de los sistemas propuestos.

La metodología consistirá en conferencias, paneles y mesas redondas, visitas a campo, debiendo destacar que los legisladores por Mendoza, hemos sido invitados a participar en un panel y mesa redonda sobre "incidencia de las cargas impositivas en el costo de las redes antigranizo", junto a industriales, productores, fabricantes e importadores de redes.

Se contará con espacios sin ningún tipo de cargo para exposición de productos e insumos de la agricultura regional.

La invitación está abierta a productores, industriales, estudiantes y profesionales interesados o vinculados con la problemática.

Pensamos que el mismo, será de singular importancia para nuestra región y de gran interés para los productores de Mendoza y de otras provincias.

Resulta manifiesta la importancia de unificar criterios e intercambiar información sobre el tema, por lo que a su vez solicitamos a los organizadores, nos hagan llegar las conclusiones del mismo, que valoramos y seguramente serán de gran interés.

Es por los motivos expuestos, que solicitamos a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto de declaración.

Oscar Sat.

—A las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología.

13

#### Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

#### DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, declare de interés nacional el Simposio Internacional sobre Protección de Viñedos y Frutales con Red Antigranizo, a realizarse entre los días 2, 3 y 4 de abril del corriente año, en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, organizado por la Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída del INTA y el Centro de Ingenieros Agrónomos Mendoza, Subsección Zona Sur —CIAM—.

Oscar Sat.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El simposio internacional cuyo auspicio solicitamos, es organizado por instituciones de gran arraigo y firme compromiso con el sur de la provincia de Mendoza.

Los diferentes enfoques sobre protección de viñedos y frutales con red antigranizo, ha llevado a convocar por parte de los organizadores, a prestigiosos expertos en la materia tanto nacionales como internacionales.

Ya son numerosas las adhesiones que se han recibido, así como la confirmación de la asistencia de destacados técnicos de Francia, Italia y España, y está a ser confirmada la de expertos de Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Es objeto del evento actualizar y adquirir nuevos conocimientos que permitan hacer frente a este flagelo que, periódicamente, provoca ingentes daños a los cultivos de la zona y de otras regiones del país.

El temario incluye, entre otros, temas como: tecnologías de aplicación de coberturas antigranizo en viñedos y frutales, efectos de microclima producidos bajo éstas, manejo de los cultivos en las nuevas condiciones, análisis económico financiero de los sistemas propuestos.

La metodología consistirá en conferencias, paneles y mesas redondas, visitas a campo, debiendo destacar que los legisladores por Mendoza, hemos sido invitados a participar en un panel y mesa redonda sobre "incidencia de las cargas impositivas en el costo de las redes antigranizo", junto a industriales, productores, fabricantes e importadores de redes.

Se contará con espacios sin ningún tipo de cargo para exposición de productos e insumos de la agricultura regional.

La invitación está abierta a productores, industriales, estudiantes y profesionales interesados o vinculados con la problemática.

Pensamos que el mismo será de singular importancia para nuestra región y de gran interés para los productores de Mendoza y de otras provincias.

Es por los motivos expuestos, que solicitamos a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto de declaración.

Oscar Sat.

—A las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología.

14

#### Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación a fin de que, por los medios correspondientes, se informe si existe algún proyecto que contemple la disolución del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el reemplazo de sus funciones por consultoras privadas.

Roberto S. Digón.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En los medios de difusión del 7 de marzo del corriente año apareció la noticia de que desde el Poder Ejecutivo de la Nación no se descartaba la posibilidad de disolver el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y su reemplazo por consultoras privadas, que se contratarían para realizar las estadísticas oficiales.

Una de las funciones indelegables del Estado es el de informar, realizar, compilar y publicar estadísticas, estudios, investigaciones y todo aquello que pueda ser utilizado por todos los ciudadanos libremente, a fin de ayudarlos a tomar decisiones.

La información oficial que el Estado tiene el respaldo de la confiabilidad que le otorga su imparcialidad e históricamente ha sido utilizada como fuente de organismos privados y oficiales, nacionales y extranjeros.

Sería muy peligroso que en esta afanosa carrera privatista incorporemos sectores externos al tratamiento de temas que son internacionalmente reconocidos de responsabilidad exclusiva del Estado, aun en países con economías más liberales que la nuestra.

Por lo expuesto, solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto.

Roberto S. Digón.

—A la Comisión de Población y Recursos Humanos.

15

#### Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

1º — Rendir homenaje a los poetas salteños Juan José Coll, José Fernández Molina, Sara San Martín, Julio Ovejero Paz, Juana Dib, Roberto Albeza, Raúl Araoz Anzoátegui, José Ríos y Juan José Botelli, cultores en el arte de la poesía nortea.

2º — Declarar de interés legislativo, la realización de este merecido homenaje a la trayectoria nacional, como talentosos y virtuosos intérpretes de la región.

3º — Entrregar una plaqueta recordatoria, con la leyenda, "La Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Poeta...", como testimonio a su noble trabajo" Buenos Aires, abril de 1997.

4º — Realizar un acto cultural para rendir el homenaje, en el Salón de Pasos Perdidos, de esta Honorable Cámara de Diputados con la participación de los poetas y artistas invitados, con la colaboración del Plan de Acrecentamiento de Eficiencia Parlamentaria (PAEP).

5º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente resolución, serán imputados al presupuesto asignado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Gloria del Socorro Aban.